

República de Colombia
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No.	269
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-01263-00
DEMANDANTE:	Sindicato de Procuradores Judiciales - PROCURAR
DEMANDADO:	Aurora Martínez Arango
MEDIO DE CONTROL:	Nulidad electoral
ASUNTO:	Auto rechaza demanda acto de ejecución no enjuiciable.

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a verificar si se encuentran acreditados los presupuestos para la admisión del presente medio de control, atendiendo los siguientes:

ANTECEDENTES

La parte demandante Sindicato de Procuradores Judiciales - PROCURAR, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, pretende se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 590 de julio 1º de 2020, mediante el cual se prorrogó el nombramiento en provisionalidad de la señora Aurora Martínez Arango, como Procuradora 28 Judicial II del Trabajo y la Seguridad Social, código 3PJ, Grado EC de Cali.

Igualmente, solicita se decrete como medida cautelar, la señalada en el artículo 230, numeral 3º del C.P.A.C.A., consistente en la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, por violación de los artículos 125 superior, 24 de la Ley 909 de 2004 y 82, 185, 187 y 216 del Decreto Ley 262 de 2000, así como la subregla jurisprudencial de la Corte Constitucional que impone el deber de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se disponen nombramientos en provisionalidad o en encargo en empleos de carrera administrativa,

sean éstos del sistema general de carrera administrativa o de alguno de los sistemas específicos.

COMPETENCIA.

Corresponde al Despacho el conocimiento del presente asunto en el trámite de única instancia, al tenor del artículo 151 numeral 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece:

“Artículo 151. Competencia de los Tribunales Administrativos en única instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
(...).

12. De los de nulidad contra el acto de elección de los empleados públicos del orden nacional de los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial o el equivalente a cualquiera de estos niveles efectuado por las autoridades del orden nacional, los entes autónomos y las comisiones de regulación.

La competencia por razón del territorio corresponde al tribunal del lugar donde el nombrado preste o deba prestar los servicios.” (Subraya del Despacho).

Lo dicho, teniendo en cuenta que en el *sub lite* se discute la legalidad del acto administrativo de prórroga del nombramiento en provisionalidad de la doctora Aurora Martínez Arango en el cargo de procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali, código 3PJ, grado EG, que corresponde al *nivel profesional*¹ dentro de la Procuraduría General de la Nación, y su designación fue efectuada por el Procurador General como director del mencionado ente autónomo, razón por la que este Tribunal Administrativo es competente para conocer del asunto en única instancia.

CONSIDERACIONES

Medio de control nulidad electoral.

El artículo 139 del CPACA establece que el medio de control de nulidad electoral procede contra actos electorales los cuales son: i) elección

¹ Decreto 264 de 2000 (febrero 22) “por el cual se establecen el sistema de clasificación y nomenclatura, y la naturaleza de las funciones de los empleos de la Procuraduría General de la Nación incluidos los del Instituto de Estudios del Ministerio Público”.
(...)

Artículo 7º. Nomenclatura de los empleos. Los empleos de la Procuraduría General de la Nación incluidos los del Instituto de Estudios del Ministerio Público se identifican con la siguiente nomenclatura:

Denominación del empleo Código Grado (...)

NIVEL PROFESIONAL

Procurador Judicial II 3PJ EC

Procurador Judicial I 3PJ EG

Profesional Universitario 3PU 19, 3PU 18, 3PU 17, 3PU 16, 3PU 15

Coordinador Administrativo 3CA 17 (...)

popular; ii) elección a cargo de cuerpo colegiado; iii) nombramiento y iv) llamamiento a proveer vacantes.

A su vez la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha definido los actos de nombramiento así²:

"(iv) Los actos de nombramiento, a través de los cuales se proveen los diversos cargos de la función pública a efectos de que el designado adquiera la categoría de servidor público. Así pues, la Sección Segunda de esta Corporación frente a esta clase de acto ha entendido que:

"Respecto a la naturaleza jurídica del acto de nombramiento, esta Corporación ha señalado que se trata de un acto condición que está sujeto a la verificación de unos presupuestos legales que conducen a formalizar el nombramiento y a completar la investidura de servidor."³

Es de advertir que aunque los actos de nombramiento son expresión propia de la función administrativa, como el legislador los enlistó como acto electoral la Sala los conoce como tal, pese a que no responden a la lógica de la función electoral. Ahora bien, debido a esta "doble naturaleza" que el ordenamiento jurídico quiso asignarle al acto de nombramiento, la Sala Electoral ha establecido que, aquel, en principio, puede controlarse mediante dos vías distintas, dependiendo de la pretensión de la demanda.

Así las cosas, será procedente la nulidad electoral "cuando la pretensión es discutir la legalidad del acto declaratorio de elección o acto electoral propiamente dicho y, la nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el propósito pretensional sea la obtención de un restablecimiento, expreso si se solicita por postulación de parte, o tácito, implícito o automático, cuando del planteamiento de la causa petendi así se advierta."⁴

Por supuesto, en cada caso se deberán cumplir los presupuestos propios de caducidad, legitimación, los requisitos de procedibilidad, y demás presupuestos procesales para la procedencia de cada medio de control, sin que la escogencia de uno u otro dependa del arbitrio del actor, sino de sus pretensiones quienes serán las que determinaran cuando se puede activar uno y otro camino." (Subraya del Despacho).

A la par, el Consejo de Estado al analizar qué es un acto administrativo de ejecución, ha dicho⁵:

² C. de E. Sección Quinta. CP. Alberto Yepes Barreiro. Proveído de agosto 30 de 2018, Rad. 25000-23-41-000-2018-00165-01.

³ C. de E. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de septiembre 4 de 2017, radicación 54-001-23-33-000-2012-00114-01 CP. William Hernández Gómez.

⁴ C. de E. Sección Quinta, auto de Sala de junio 30 de 2016, radicación 68001233300020160048401 CP. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo. Robiel Barbosa Otálora – Personero Municipal de Floridablanca.

⁵ C. de E. Sección Cuarta, CP: Jorge Octavio Ramírez R., providencia de septiembre 26 de 2013, Radicación No. 68001-23-33-000-2013-00296-01(20212). Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Demandado: Municipio de Bucaramanga.

"Sea lo primero advertir que son actos definitivos, susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 1437, "los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación".

Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad dirigida al ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, reconoce, modifica o extingue situaciones jurídicas, **mientras que los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa⁶, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado.**

De acuerdo con lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que **"los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones".⁷**

No obstante, esta Corporación ha admitido que si el supuesto "acto de ejecución" **excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer el medio de control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad⁸, circunstancia que no ocurre en el caso concreto"** (Subrayas del texto, negritas de la Despacho).

Aunado a lo anterior, sobre el mismo asunto el órgano de cierre de esta jurisdicción dispuso:⁹

"25. La jurisprudencia¹⁰ de esta Corporación se ha pronunciado en el sentido que los actos de ejecución, no son objeto de control por la jurisdicción contenciosa administrativa pues, en ellos no se concreta una función administrativa o electoral, que pueda ser cuestionada y revisada

⁶ C. de E. Sección Cuarta, CP: Ligia López Díaz, providencia de marzo 30 de 2006, Radicación: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias de noviembre 15 de 1996, expediente 7875, CP. Consuelo Sarriá Olcos, de agosto 9 de 1991, expediente 5934 CP. Julio César Uribe Acosta y de septiembre 14 de 2000, expediente 6314 CP. Juan Alberto Polo Figueroa.

⁷ C. de E. Sección Segunda, Subsección "A", CP: Luis Rafael Vergara Quintero, auto de abril 15 de 2010, Radicación: 52001-23-31-000- 2008-00014-01(1051-08).

⁸ Al respecto ver: C. de E. Sección Cuarta, CP: Ligia López Díaz, providencia de marzo 30 de 2006, Radicación: 25000-23-27-000-2005- 01131 01(15784); Sentencia del 15 de noviembre de 1996, expediente 7875 CP. Consuelo Sarriá Olcos.

⁹ Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Rocío Araújo Oñate. Bogotá, D.C., Sentencia del 9 de agosto de 2019. Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00264-01.

¹⁰ . Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro, Auto del 20 de noviembre de 2013. Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00430-01.

sino que obedece al acatamiento de una orden proferida por una autoridad con jurisdicción frente a la cual no existe competencia de esta jurisdicción para controvertir las motivaciones y las órdenes impartidas.

26. No obstante esta Corporación ha admitido que si el supuesto “acto de ejecución” excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en otro acto administrativo que se pretende ejecutar – en otras palabras, si se excede la decisión a ejecutar –, es procedente ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad¹¹.”

Y respecto la procedencia del medio de control de nulidad electoral frente a actos de ejecución de nombramientos, la misma Alta Corte sostuvo:¹²

“...En el caso que ocupa la atención de la Sala, la actuación de la Universidad del Norte, de la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Niño Jesús y del gobernador del Atlántico, se limitó a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el juez de tutela que, en aras de garantizar los derechos fundamentales del entonces participante Marco Tulio Bolaño Cervantes, emitió específicas órdenes dentro del concurso de méritos que fueron determinantes para la calificación de los participantes y por tanto, la conformación de la terna.

En otras palabras, lo que hizo la administración fue obedecer la sentencia del juez de tutela, y lo que pretende el demandante es que se revise dicha decisión, con lo cual se convertiría la acción electoral en una tercera instancia.

2.5. Al respecto, es importante advertir que los cargos expuestos en la demanda de nulidad apuntan todos y cada uno de ellos a controvertir la decisión del juez de tutela y en nada se relacionan con asuntos no tratados por este. **Como lo señaló la Sección recientemente¹³, solo sería posible admitir la procedencia de la acción de nulidad electoral frente a actos de ejecución cuando los cargos contra este apunten a controvertir asuntos distintos a los que dieron origen a la decisión que se dice cumplir, pues, de no admitirse que son enjuiciables, esos aspectos quedarían sin control judicial. (...)**”

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrada ponente: Susana Buitrago Valencia, Sentencia del 31 de marzo de 2011. Radicación número: 08001-23-31-000-2010-01230-01 (AC). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784); Sentencia del 15 de noviembre de 1996, exp. 7875 C.P. Consuelo Sarria Olcos.

¹² SECCION QUINTA. C.P. ALBERTO YEPES BARREIRO. Sentencia del 18 de julio de 2013. Radicación número: 08001-23-31-000-2012-00216-01

¹³ CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta. Auto de 10 de mayo de 2013, Rad. 110010328000201300013-00. Demandante: Juan Francisco Forero Gómez. Demandado: Notaria 74 de Bogotá– Elsa Villalobos. Sarmiento. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

Bajo esa línea, corresponde al Despacho determinar si el acto administrativo acusado es susceptible de control jurisdiccional en ejercicio del medio de control nulidad electoral de que trata el artículo 139 del CPACA.

CASO CONCRETO

Revisado el plenario y según lo expuesto por los mismos demandantes, se encuentra que la Dra. Aurora Martínez Arango fue retirada del servicio en el cargo de Procurador Judicial 3PJ Grado EC de la Procuraduría 19 Judicial II Administrativa Cali por el Decreto 3872 de agosto 8 de 2016, aplicando la lista de elegibles surgida en el marco del concurso público de méritos que adelantó la Procuraduría General de la Nación.

En razón a la desvinculación, la señora Martínez Arango promovió diferentes acciones, entre otras, el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Jurisdicción radicado al No. 76001233300320170039300, en el cual, la magistrada Zoranny Castillo Otálora decretó como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto No. 3872 de 2016, disponiendo:

*"PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional del Decreto 3872 de 8 de agosto de 2016, por medio del cual el Procurador General de la Nación retiró del servicio a la señora Aurora Martínez Arango en el Cargo de Procurador Judicial Código 3PJ Grado EC de la Procuraduría 19 Judicial II Administrativa de Cali cargos de Procurador Judicial II que no hayan sido provistos con la lista de elegibles (Resolución No. 345 de 8 de julio de 2016) del Concurso de Méritos convocado mediante Resolución No. 040 de 2015, **únicamente hasta que la edad legal para acceder a su pensión de vejez y sea incluida en nómina de pensionados.**"*¹⁴ (Negrilla de la Sala)

Posteriormente, a través del Auto No. 501 del 23 de noviembre de 2017 se amplió la medida en el mismo proceso en los siguientes términos:

*"PRIMERO: AMPLIAR la medida cautelar decretada en auto interlocutorio No. 424 de 14 de septiembre de 2017, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que una vez se produzca el reintegro de la accionante a la Entidad el cargo de Procuradora 28 Judicial II Laboral de Cali, se efectúe sin solución de continuidad, para garantizar exclusivamente el pago de aportes en pensión, desde el momento que se produjo su desvinculación de la entidad 8 de agosto de 2016) y por los meses en que no se hubieren realizado los mentados aportes, en la proporción legal correspondiente, **hasta tanto la señora Aurora Martínez Arango alcance la edad legal para la pensión**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.*

¹⁴ Fl. 67-68

SEGUNDO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación para que en un término perentorio de ocho (8) días siguientes a la notificación de la presente providencia, reintegre en el cargo de Procuradora Judicial II a la señora Aurora Martínez Arango hasta que alcance la edad legal para acceder la pensión, so pena de incurrir en sanción de multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Negrilla de la Sala)

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación profirió el Decreto 6352 de diciembre 14 de 2017 “Por medio del cual se da cumplimiento a una decisión Judicial”, diciendo:

“ARTÍCULO PRIMERO.- NÓMBRESE en provisionalidad SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, a la doctora AURORA MARTINEZ ARANGO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 66.650.265 del Cerrito, en el cargo de procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali, código 3PJ, grado EG, con sede territorial en la ciudad de Cali, en consideración a la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo Uno.- La vinculación en provisionalidad de la doctora AURORA MARTINEZ ARANGO, en virtud de la Medida Cautelar ordenada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, **operará hasta que cumpla la edad legal para acceder a su pensión de vejez y sea incluida en nómina de pensionados.**” (Negrilla de la Sala)

Ulteriormente, aunque se advierte que la misma entidad ha venido expidiendo diversos actos administrativos sin motivación, entre ellos el acto acusado, prorrogando el nombramiento de la señora Martínez Arango, de lo dispuesto dentro del proceso ordinario referido en el Decreto 6352 de 2017 se puede colegir que los mismos se han venido dando conforme a la medida cautelar decretada desde el inicio, donde se señaló expresamente que su reintegro estaría vigente hasta que fuera incluida en nómina de pensionados.

En este punto, resulta menester traer a colación que en el mismo sentido esta Corporación con ponencia del suscrito ya se había pronunciado sobre el asunto mediante Auto 01 del 17 de enero de 2020¹⁵, en un recurso de súplica contra la providencia que rechazó la demanda por acusar un acto de ejecución no enjuiciable, diciendo:

“(…) Ulteriormente, aunque se advierte que la misma entidad expidió diversos actos administrativos sin motivación, prorrogando el nombramiento de la señora Martínez Arango, de lo dispuesto dentro del proceso ordinario en providencia de enero 18 de 2018 se puede colegir que los mismos se dieron conforme a la medida cautelar decretada desde el inicio, de acuerdo con la aclaración al auto de ampliación de la medida, donde se señaló expresamente que su reintegro estaría

¹⁵ Pso radicado 76001-23-33-000-2019-00953-00, nulidad electoral, Dte: Sindicato de Procuradores Judiciales - PROCURAR, Dda: Aurora Martínez Arango.

vigente hasta que fuera incluida en nómina de pensionados. Se transcribe:¹⁶

"PRIMERO: Aclarar el numeral primero del auto interlocutorio No. 501 del 23 de Noviembre de 2017 que quedará así:

"PRIMERO: AMPLIAR la medida cautelar decretada en auto interlocutorio No. 424 de 14 de septiembre de 2017, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que una vez se produzca el reintegro de la accionante a la Entidad el cargo de Procuradora 28 Judicial II Laboral de Cali el mismo se haga sin solución de continuidad, para garantizar única y exclusivamente el pago de aportes en pensión desde el momento en que se produjo su desvinculación de la entidad 8 de agosto de 2016) y por los meses en que no se hubieren realizado los mentados aportes, en la proporción legal correspondiente, **hasta tanto la señora Aurora Martínez Arango sea incluida en nómina de pensionados, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído**" (Negrilla de la Sala)

Además, se resalta de la providencia anterior, que en los fundamentos de la Sala de Decisión para ampliar la medida cautelar cuya aclaración se solicitó, se indicó que, no obstante no haberse consignado en la parte resolutive que **"...el amparo otorgado a la accionante se extiende hasta el momento en que sea efectivamente incluida en nómina de pensionados y se le garantice el pago de su mesada,..."**, sobre este aspecto ya había quedado consignada la necesidad de proteger los derechos laborales de la demandante, en el sentido de ordenar su reintegro al cargo de esa forma, pues a juicio de la magistrada, sólo así se salvaguardan derechos fundamentales como el mínimo vital y la vida en condiciones dignas.

Así las cosas, del análisis efectuado discurre la Sala que, contrario a lo expuesto por la recurrente, la prórroga del nombramiento en provisionalidad de la doctora Aurora Martínez Arango en el cargo de procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali, código 3PJ, grado EG, contenida en el acto demandado Decreto No. 1496 de julio 2 de 2019, si corresponde a un acto de ejecución a la orden judicial de la medida cautelar decretada por la magistrada Zoranny Castillo Otálora en el proceso con radicado 76001233300320170039300, dado que le da continuidad y cumplimiento a las órdenes impartidas.

Ahora, si bien como quedó expuesto en la jurisprudencia anteriormente transcrita, excepcionalmente sería posible admitir el medio de control de nulidad electoral frente a actos de ejecución en los casos en que se exceda la decisión a ejecutar, o cuando los cargos contra este apunten a controvertir asuntos distintos a los que dieron origen a la decisión que se dice cumplir, dichos presupuestos no se encuentran acreditados en el caso de estudio, teniendo en cuenta que la prórroga del nombramiento no desborda la medida cautelar ordenada, ya que, aunque a la fecha

¹⁶ Fls. 158-159

la señora Aurora Martínez Arango cuenta con la edad y semanas de cotización para el reconocimiento pensional, según el oficio fechado septiembre de 2019 expedido por la Procuraduría y aportado por la misma demandante¹⁷, aún no goza de su derecho prestacional y menos está incluida en nómina de pensionados, como se dispuso en la orden judicial que se ejecuta, ya que ni siquiera ha adelantado el trámite ante Administradora de Pensiones.

A la par, los motivos de disenso de la prórroga del nombramiento cuestionado mediante el presente medio de control, solo reprochan la omisión de la entidad de verificar si subsistían las condiciones de edad y semanas cotizadas que dieron lugar a la medida cautelar, olvidando que como ya se expuso, de acuerdo a la ampliación también se necesita estar incluida en nómina de pensionados, argumento que, a juicio de la Sala apunta a controvertir el mismo asunto que dio origen a la decisión que se ejecuta, contenida en el Auto del 18 de enero de 2018.

Por ello, no es dable colegir, como lo hace la recurrente, que con la prórroga del nombramiento de la prepensionada su derecho a la estabilidad laboral se convierta en absoluto, puesto que se itera, la medida cautelar ejecutada quedó condicionada al cumplimiento de los requisitos de edad, semanas de cotización y la inclusión en nómina de pensionados, decisión judicial que no es posible debatir a través del presente medio de control electoral. (...)"

Ergo, se repite, como ya se ha manifestado en anteriores ocasiones sobre el mismo asunto, la prórroga del nombramiento en provisionalidad de la doctora Aurora Martínez Arango en el cargo de procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali, código 3PJ, grado EG, contenida en el acto demandado Decreto No. 590 de julio 1 de 2020, corresponde a un acto de ejecución a la orden judicial de la medida cautelar decretada por la magistrada Zoranny Castillo Otálora en el proceso con radicado 76001233300320170039300, dado que le da continuidad y cumplimiento a las decisiones impartidas, y por ello, no puede ser enjuiciable a través del presente medio de control, tal como lo prevé el artículo 169 numeral 3 del CPACA y lo señala la jurisprudencia arriba citada.

Sumado a ello, de las pruebas aportadas tampoco se advirtió alguna circunstancia excepcional que permita admitir el presente medio de control de nulidad electoral frente al acto de ejecución, como que la autoridad hubiese excedido la decisión cuyo cumplimiento persigue.

Finalmente se precisa que, las providencias traídas a colación por la actora no resultan aplicables al caso, por tratarse de supuestos facticos distintos al *sub lite*, ya que ninguna de ellas versa sobre la procedibilidad del medio de control de nulidad electoral frente a actos de ejecución

¹⁷ Fls. 150-154

como el aquí referido, es decir, donde en la orden judicial se haya supeditado la permanencia del reintegro a la inclusión en nómina de pensionados.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO.- RECHAZAR la demanda incoada a través del medio de control de nulidad electoral, presentada por el Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR en contra de Aurora Martínez Arango (Procuradora 28 Judicial II del Trabajo y la Seguridad Social código 3pj Grado EC de Cali).

SEGUNDO.- Reconocer Personería a la abogada doctora Cindy Karina Marquines Quiñones, identificada con C.C. No. 1.019.085.315 y T.P. No. 303.762 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial del Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR, en los términos del poder que se adjunta al expediente virtual.

TERCERO.- En firme esta decisión, DEVUÉLVANSE los documentos acompañados con la demanda al interesado sin necesidad de desglose y archívese lo actuado.

Notifíquese y Cúmplase


EDUARDO ANTONIO LUGO BARROS
Magistrado